



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SAINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día de de 2005, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual, en relación con el expediente **RO 2004/1040**, se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PONE FIN AL PERÍODO DE INFORMACIÓN PREVIA A LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA LA ENTIDAD “AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A.U.” POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTROL SOBRE EL USO DE LA NUMERACIÓN Y SE ACUERDA NO INICIAR EL MISMO

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Del escrito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información que dio lugar al inicio del período de información previa

Con fecha de 25 de mayo de 2004 se recibió en esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones escrito de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se pone de manifiesto el presunto incumplimiento por parte de AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (en adelante, AUNA) de la obligación de control sobre el uso de la numeración concedida por esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y se da traslado de las actuaciones realizadas por la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional (en adelante, CSSTA), a los efectos de determinar la procedencia de las correspondientes actuaciones sancionadoras.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

De la documentación aportada a esta Comisión resulta acreditado que el día 3 de noviembre de 2003 tuvo entrada en el Registro de la CSSTA denuncia contra el servicio de tarificación adicional prestado a través de los números 803400901, 803400902 y 806404100.

Mediante escrito de fecha de 19 de noviembre de 2003 la CSSTA requirió a la entidad AUNA para que facilitase la identidad y dirección de los titulares de los números denunciados a los efectos de cumplir con la tramitación prevista en el apartado séptimo de la Orden PRE/361/2002 de 14 de febrero (BOE núm 46, de 22 de febrero), en relación con los incumplimientos del Código de Conducta.

En atención a dicho requerimiento AUNA respondió mediante carta de 18 de marzo de 2004, en la que señala como titulares de los números referenciados, por una parte, a la empresa EAGERTECH 21, S.L. (en adelante EAGERTECH) y por otra a la empresa DISTRIBUCIONES TELEMATICAS PREMIUM, S. L. (en adelante DTP).

Realizado el traslado de la denuncia a EAGERTECH, ésta manifiesta en un escrito de 26 de abril de 2004 que mediante contrato de fecha 2 de junio de 2003 ha cedido la explotación de las líneas de referencia a la entidad AGON AGORA 8, S.L de forma que permite a los clientes de esta sociedad, como prestadora del servicio acceder a sus propios servicios a través de una llamada a dichos números. Asimismo, alega que es un simple mediador entre la operadora de telecomunicaciones y el prestador del servicio y que en ningún caso está obligada a supervisar ni controlar ni la publicidad que el prestador del servicio realice por su cuenta en el ejercicio de su actividad de prestación de servicios de tarificación adicional a sus clientes, ni el contenido de los servicios puesto que tanto el contrato firmado con el prestador del servicio como el código de conducta excluyen su responsabilidad, al hacer responsable de los incumplimientos del código de conducta a la persona del prestador de servicios.

De la misma forma DTP, tras haberse realizado el traslado de la denuncia, manifiesta mediante escrito con fecha de 7 de abril de 2004 que no es el prestador final del servicio, sino que ha cedido la explotación de las líneas impugnadas a uno de sus clientes: MARQUEZE PRODUCCIONES.

De los hechos expuestos, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información deduce que *“parece desprenderse la existencia de un incumplimiento, por parte de AUNA de la obligación de control sobre el uso de la numeración que le ha sido asignada”*, por lo que comunica las actuaciones realizadas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a los efectos de determinar la procedencia de las correspondientes actuaciones sancionadoras.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Segundo.- Apertura del período de información previa y alegaciones de AUNA

A la vista de este escrito y en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) y del artículo 12 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993 (en adelante, Reglamento del Procedimiento Sancionador), se informa mediante escrito de 22 de junio de 2004 a AUNA de la apertura del período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. Se da traslado del expediente y se le concede un plazo inicial de 10 días (posteriormente ampliado en 5 días adicionales a petición de ésta) para formular alegaciones. Asimismo se le requiere facilitar la siguiente información y documentación:

- *En relación con los números citados, ¿qué medidas ha adoptado para el cumplimiento de las obligaciones que ha de asumir en su condición de operador?*
- *Contrato vigente y anteriores suscritos entre Auna y EAGERTECH.*
- *Documento de sometimiento al Código de Conducta en los casos denunciados.*
- *Cualquier otra información y documentación acreditativa del control sobre el uso de la numeración mencionada que hubiera efectuado Auna.*

AUNA, junto con su escrito del día 12 de julio de 2004, aporta el contrato celebrado entre AUNA y EAGERTECH, así como una copia del documento de sometimiento del entonces vigente Código de Conducta por parte de EAGERTECH. Asimismo, mediante escrito de fecha de 12 de noviembre de 2004 se requiere a AUNA aportar las mismas informaciones y documentos en relación con DTP. El día 3 de diciembre de 2004 se recibe en el registro de esta Comisión escrito de AUNA por el que viene a contestar a este requerimiento de información, y se incluye una copia del contrato suscrito por las entidades AUNA y DTP. Se aporta adicionalmente documentación acreditativa de la comunicación a DTP de las modificaciones de la regulación de los servicios de tarificación adicional introducidas por la Orden PRE/2140/2004, así como el nuevo Código de Conducta a fin de que DTP adopte las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento y comunique estas modificaciones a sus propios clientes y usuarios.

En los escritos antes referidos, AUNA manifiesta lo siguiente:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- a) Sobre las medidas de AUNA para el cumplimiento de las obligaciones que ha de asumir en su condición de operador

AUNA pone de manifiesto que en el contrato que tiene suscrito con las entidades de intermediación comercial EAGERTECH y DTP, en virtud del cual asigna a éstas numeración para la prestación de servicios de telecomunicaciones, asegura el control de la numeración titularidad, con conocimiento de a qué entidad o persona utiliza definitivamente la misma, mediante la siguiente cláusula décimo primera:

“Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos en ningún caso por EL REVENDEDOR a terceros sin previa conformidad expresa y escrita de AUNA.

No obstante lo anterior, el REVENDEDOR podrá asignar los números de red inteligente sobre los que presta el servicio a accesos directos de sus clientes, previo consentimiento de AUNA”.

- b) Sobre el sometimiento al actual código de conducta

AUNA declara que el contrato celebrado con EAGERTECH obliga al sometimiento de ambas partes al Código de Conducta y a los dictámenes de la CSSTA. Asimismo, EAGERTECH suscribe el Código de Conducta. En este sentido, la cláusula séptima dispone que: *“... Ambas partes declaran aceptar y someterse al Código de Conducta para la Prestación de Servicios de Tarificación Adicional vigente en cada momento, quedando vinculados al mismo con carácter obligatorio. Se incorpora como Anexo, el Código de Conducta vigente en el momento de la firma del presente Contrato...”* Por su parte la cláusula decimocuarta señala que: *“... Se incorpora, como Anexo a este contrato, el Código de Conducta elaborado por la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, al que ambas partes declaran aceptar y someterse, quedando vinculados al mismo con carácter obligatorio”.*

Por otra parte, en la misma cláusula séptima se prevé la posibilidad de interrumpir el uso de la numeración en caso de incumplimiento del Código de Conducta por EAGERTECH o sus clientes. Así, la citada cláusula séptima declara que *“en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente, en el supuesto de que la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional estime que se ha producido un incumplimiento del Código de Conducta por parte del REVENDEDOR o los clientes de éste, AUNA, una vez recibido el correspondiente Informe de la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, procederá, a solicitud de ésta a interrumpir el servicio y retirar el número telefónico asignado al REVENDEDOR sobre el que se ha incumplido el Código de Conducta, pudiendo igualmente resolver el contrato, haciéndose el REVENDEDOR responsable de los daños y perjuicios*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

que se le irroguen a AUNA, por sí o a través de los servicios prestados por terceros”.

Además, AUNA establece en sus contratos que el incumplimiento del Código de Conducta puede suponer la resolución del contrato con la entidad intermediaria según dispone la cláusula decimosegunda. En efecto, la cláusula decimosegunda del contrato, en su apartado tercero establece que *“AUNA podrá resolver el contrato si EL REVENDEDOR incumpliera cualquiera de las obligaciones contractuales, o de las obligaciones establecidas en el Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional vigente en cada momento...”*; asimismo, en el apartado cuarto del mismo artículo se prevé que *“igualmente, AUNA podrá resolver el contrato en su totalidad o para los números de red inteligente 803/806/807 afectados, en caso de incumplimiento por EL REVENDEDOR o sus clientes del Código de Conducta elaborado por la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional vigente en cada momento o de otras obligaciones legalmente establecidas, sin que por ello tenga derecho EL REVENDEDOR o sus clientes a indemnización alguna”.*

Estas mismas previsiones en relación con el sometimiento al Código de Conducta se establecen en el contrato celebrado entre AUNA y DTP. La cláusula séptima de dicho contrato declara el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento del Código de Conducta por parte del REVENDEDOR o sus clientes, con la misma redacción que la anteriormente referenciada en relación con el contrato entre AUNA y EAGERTECH. Se establece igualmente como posible causa de resolución del contrato el incumplimiento del Código de Conducta y, por último, en la cláusula decimoquinta las partes declaran expresamente someterse a este Código, que se incorpora como anexo al contrato. Por otra parte, AUNA aporta documentación relativa a la remisión de la nueva versión del Código de Conducta a DTP para que esta entidad proceda a su aplicación y al traslado a sus clientes o usuarios.

c) Alegaciones relativas a otra información acreditativa del control

AUNA manifiesta que se encuentra al corriente del pago de las tasas anuales a la CMT por la asignación de numeración, que remite anualmente la encuesta de numeración y que cumple escrupulosamente con los requerimientos de la SETSI y con su obligación de retirada de la numeración sobre la que ha recaído resolución en ese sentido.

Por último alega que la falta de identificación inmediata del prestador de servicios en el presente expediente se debe a que la misma no se solicitó expresamente, lo que ha quedado solucionado en recientes expedientes gracias a una mayor claridad de la SETSI en sus requerimientos. Al efecto, como documento número 3, aporta escrito de la Secretaria en otro



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

procedimiento similar así como la correspondiente contestación de AUNA con los que pretende acreditar que su falta de identificación del proveedor del servicio ante la CSSTA en el caso controvertido se debió a una confusión en los términos del escrito de la CSSTA dado que cuando la CSSTA le solicita identificar directamente al prestador del servicio, AUNA lo identifica correctamente.

d) Por último, alega AUNA que la ausencia de regulación sobre la actividad de intermediación no significa que sea una actividad susceptible de ser sancionada e invoca la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 6 de noviembre de 2003 (Expte. AJ 2003/0959) en el que en un caso similar al presente la CMT concluyó que los hechos denunciados no suponían modificación de las asignaciones efectuadas por la Comisión, que no se apreciaba la existencia de una supuesta cesión no autorizada de la titularidad de la numeración asignada al operador y que se trataba, en definitiva de una mera utilización de tales números por un tercero, en calidad de intermediario en la comercialización frente a terceros de los servicios de red inteligente asociados a dicha numeración, sin que afectase a la titularidad de la asignación efectuada por la Comisión que se mantenía a favor del operador, siendo habitual esta práctica de intermediación en este mercado.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Fundamentos jurídicos procedimentales

PRIMERO.- Calificación del escrito presentado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

El escrito de fecha 25 de mayo de 2004 presentado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ante la Comisión en virtud del cual se pone de manifiesto el presunto incumplimiento por parte de la obligación de control sobre el uso de la numeración concedida por esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y se da traslado de las actuaciones realizadas por la CSSTA, a los efectos de determinar la procedencia de las correspondientes actuaciones sancionadoras, constituye una denuncia por unos hechos que pudieran constituir una infracción administrativa de las tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones consistente en un incumplimiento por el operador de las obligaciones en relación con los recursos públicos de numeración que le han sido asignados.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El artículo 11 del Reglamento del Procedimiento Sancionador, aplicable a los procedimientos sancionadores tramitados por esta Comisión, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 58 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, determina que:

1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

A efectos del presente Reglamento, se entiende por: (...)

d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa.

En atención a lo anterior, y en virtud del precepto anterior, ha de calificarse el escrito de referencia como una denuncia a fin de examinar, con la consideración de las alegaciones presentadas durante el trámite de actuaciones previas abierto al amparo del artículo 69.2 de la LRJPAC y del artículo 12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador, si procede iniciar o no el correspondiente expediente sancionador.

SEGUNDO.- Competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Los artículos 48.3.j) y 50.7 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones consagran como función de la Comisión, el ejercicio de la potestad sancionadora en los términos previstos en esa Ley.

Conforme a los mismos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es competente, de acuerdo con el artículo 58 a) de la LGTel para sancionar las infracciones muy graves tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones entre las cuales se encuentra el incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración debidamente aprobados (art. 53.w) LGTel. Asimismo, es competente para sancionar, en el ámbito material de su actuación las infracciones graves previstas en el artículo 54.q), consistentes en cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones de los operadores explotadores de redes o prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas o de los usuarios, previsto en las leyes vigentes, salvo que deba ser considerado como infracción muy grave. Por el contrario, no será competencia de la Comisión la sanción por el incumplimiento de las obligaciones impuestas a operadores de redes o de servicios, de comunicaciones electrónicas o de sus usuarios, previsto en las leyes vigentes,



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave con lo que, a excepción del incumplimiento de los requerimientos de información formulados por la Comisión, la sanción de las infracciones leves corresponderá al Ministerio.

Con objeto de determinar la competencia de esta Comisión para resolver acerca de la cuestión planteada en la denuncia, ha de analizarse si la conducta descrita en el citado escrito se puede considerar como una conducta sancionable por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

En este sentido, el propio denunciante ya indica que los hechos descritos en el procedimiento se ponen en conocimiento de la Comisión por considerar que AUNA podría haber incumplido su obligación de control sobre el uso de la numeración.

En el momento en que se producen los hechos denunciados estaba vigente el el Reglamento de Procedimiento de Asignación y Reserva de Recursos Públicos de Numeración por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobado por Real Decreto 225/1998, de 16 de febrero (BOE de 25 de febrero de 1998).

Este reglamento, bajo el epígrafe "Condiciones de utilización de los recursos públicos de numeración" disponía en su artículo 13 apartado 1 letras b) y c) que los recursos públicos de numeración asignados deberán permanecer bajo el control del titular de la asignación y que no podrán ser objeto de transacciones comerciales.

En el apartado 2 de Reglamento se establecía, asimismo, que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, mediante Resolución motivada, podría igualmente imponer condiciones específicas para el uso de los recursos asignados en el momento de la asignación o con posterioridad, teniendo en cuenta las características de los recursos asignados o del servicio para el que éstos se van a utilizar.

En el presente expediente, no se habían impuesto estas condiciones dado que la Resolución de 14 de mayo de 2003 por la que se asignó la numeración de tarificación adicional controvertida a AUNA no se establecieron obligaciones específicas. Ello no quiere decir que al amparo del citado Reglamento no hubieran podido llegar a imponerse si se hubiera considerado necesario.

En suma, de acuerdo con estos preceptos cabe concluir la competencia de esta Comisión para incoar y conocer sobre la supuesta infracción denunciada por incumplimiento de las condiciones de utilización de los recursos públicos de numeración establecidas en el Real Decreto 225/1998 de 16 de febrero y, en particular, de la condición de control de la numeración y, consecuentemente, la



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

competencia para decidir sobre la iniciación o no del correspondiente procedimiento sancionador, según lo dispuesto en el artículo 11.1 del Reglamento del Procedimiento Sancionador.

La instrucción del presente expediente ha de circunscribirse necesariamente a la compatibilidad de los hechos denunciados con la normativa vigente al tiempo de su materialización, no pudiendo aplicarse retroactivamente disposiciones limitativas de derechos. Así, la LRJPAC en su artículo 128 dispone que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen infracción administrativa y que las disposiciones sancionadoras únicamente producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor. En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento del Procedimiento Sancionador en su artículo 4 al establecer que sólo se podrán sancionar infracciones consumadas y respecto de conductas y hechos constitutivos de infracciones administrativas y que las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo salvo cuando favorezcan al presunto infractor, en aplicación del principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución.

SEGUNDO.- Valoración de las actuaciones practicadas en el periodo de información previa

a) Naturaleza del periodo de información previa

El artículo 69.2 de la LRJPAC establece que, con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Esta misma previsión y en idénticos términos viene recogida en el artículo 12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador.

El periodo de información previa es un trámite administrativo destinado a evitar los efectos negativos que puede causarse a los afectados por la apertura de un procedimiento sancionador de forma automática con la mera presentación de una denuncia. El trámite de diligencias previas responde, por tanto, a razones elementales de prudencia, tratando de evitar que la precipitación a la hora de acordar la apertura de un procedimiento, que nunca debió iniciarse por carecer de base suficiente, provoque perjuicios para los afectados.

En coherencia con lo anterior, y partiendo de la repercusión que la apertura inadecuada de un procedimiento sancionador puede presentar en la esfera jurídica del afectado, han de ponerse en juego buena parte de estos principios con carácter previo a la apertura del procedimiento para evitar, en la medida de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

lo posible, una apertura inadecuada del mismo. Será, por tanto, necesario adoptar en la valoración de las alegaciones y de la documentación aportada por las partes similar actitud a la que exigiría en el curso del procedimiento sancionador si llegara a iniciarse, sopesando su valor a la luz de los principios de la potestad sancionadora recogidos en el Título IX de la LRJPAC que han de ser tenidos también ahora en consideración.

b) Valoración en relación con la obligación de control de la numeración

Sobre la base de la denuncia presentada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta Comisión inició un período de información previa dirigiendo a las empresas interesadas requerimientos de información que tenían por objeto la verificación de los hechos controvertidos o, al menos, llegar a la conclusión sobre si los motivos esgrimidos por el citado Ministerio denunciante podían ser considerados suficientes para proceder a la apertura de un procedimiento sancionador.

En las alegaciones de AUNA, se pone de manifiesto cómo en el contrato firmado con sus comercializadores, denominado “Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones”, la entidad AUNA se compromete a prestar a EAGERTECH o DTP, según el caso, el servicio de telecomunicaciones soporte para la prestación de servicios tarificación adicional.

De las alegaciones presentadas por AUNA y de los términos del propio contrato se desprende que las entidades EAGERTECH y DTP ejercen de intermediarias entre AUNA y aquellas empresas o proveedores de información que quieran prestar sus servicios a través de los números 803, 806 y 807. En concreto, son EAGERTECH y DTP las que realizarían la actividad de intermediación comercial mediante la promoción, contratación, gestión de altas y bajas o modificaciones solicitadas por los clientes, así como la facturación de los mismos.

En virtud del citado contrato son EAGERTECH y DTP los que, en su propio nombre, gestionan la prestación de servicios de tarificación adicional prestados sobre determinados recursos de numeración asignados a AUNA. En efecto, AUNA cede a estas entidades la gestión de dichos números y a su vez EAGERTECH y DTP asumen las responsabilidades, tanto propias como de sus clientes, que se puedan derivar de la actividad de prestación del servicio de cara a AUNA.

En este sentido, el entonces vigente Reglamento de Procedimiento de Asignación y Reserva de Recursos Públicos de Numeración por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobado por Real Decreto 225/1998, de 16 de febrero, bajo el epígrafe ‘Condiciones de utilización de los recursos



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

públicos de numeración” disponía en su artículo 13 apartado 1 letras b) y c) que los recursos públicos de numeración asignados deberán permanecer bajo el control del titular de la asignación y que no podrán ser objeto de transacciones comerciales.

De los hechos descritos en la denuncia no puede deducirse la existencia de un incumplimiento de esta obligación de control de la numeración, sino únicamente de la obligación de identificar correctamente al prestador de servicios de tarificación adicional en contestación al requerimiento de la Secretaría.

En el contrato aportado entre Auna y sus revendedores no se pierde la titularidad de la asignación ni el control sobre la misma. El contrato tiene por objeto la prestación del servicio de telecomunicaciones soporte para la prestación de servicios de tarificación adicional consistente en la gestión de las llamadas entrantes a través de números de inteligencia de red 803/806/807.

El titular de la numeración es siempre aquél al que la CMT le realizó la asignación mediante Resolución de 14 de mayo de 2003. No hay ningún dato obrante en el presente expediente que indique que en el contrato entre AUNA y el revendedor se haya pretendido ceder la titularidad del número y con ello el control del mismo. De hecho, en el expediente y en los contratos aportados no se pone en duda que el responsable de retirar el número telefónico en caso de incumplimiento del prestador del servicio de tarificación adicional es AUNA. Tampoco existe constancia de que la Secretaría haya solicitado al operador de red la retirada del número y que este haya incumplido con su obligación.

En el presente caso, como en el contemplado por esta CMT en su Resolución de 6 de noviembre de 2003, se produce una mera utilización de los números por un tercero en calidad de intermediario en la comercialización con los prestadores de servicios de red inteligente asociados a la numeración controvertida, sin que afecte a la titularidad de la asignación que se mantiene a favor de AUNA.

Al igual que en aquel expediente, las empresas EAGERTECH y DTP prestan sus servicios de telecomunicaciones en calidad de intermediarias, comercializando en su propio nombre y por su cuenta servicios de red inteligente de AUNA.

Ahora bien, como ya se expresó también en la citada Resolución de 6 de noviembre de 2003, la utilización por parte de las entidades intermediarias de la numeración de los operadores con derecho a ella no exime a los titulares de tales recursos de las responsabilidades que pesan sobre ellos en cuanto a la adecuada utilización que se hagan de los mismos. El titular de la numeración es pues responsable, a los efectos de las obligaciones impuestas por la



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

normativa en vigor, por el uso de la numeración que lleven a cabo sus intermediarios.

En la misma línea, la Resolución de 26 de febrero de 2004 (exp. RO 2003/1769) al abordar la obligación que incumbe al operador asignatario de la numeración de facilitar la conservación de los números telefónicos de abonados considera que *“la existencia de intermediarios o revendedores de los servicios de COLT ni limita ni reduce la responsabilidad de esta entidad, en su condición de operador de telecomunicaciones, respecto del cumplimiento de las obligaciones que, como consecuencia directa de su condición de operador le corresponden, y entre las que se encuentra la obligación de atender las solicitudes de portabilidad que se cursen en nombre los abonados a sus servicios de telecomunicaciones (...) adviértase que si el operador asignatario de la numeración no mantuviera el control de los recursos de numeración que le son asignados por esta Comisión, la sucesión de posibles comercializadores dificultaría enormemente el cumplimiento de las obligaciones que la normativa impone a los operadores de servicios de telecomunicaciones electrónicas.*

Es decir, en lo que a estos hechos se refiere, la existencia de revendedores de los servicios no implica la cesión de la numeración, que seguía estando bajo el control del asignatario de la numeración y a quien incumbe interrumpir el servicio en caso de incumplimiento del Código de Conducta por parte del prestador del servicio, y así se recogía literalmente en el contrato de AUNA con sus comercializadores, no habiéndose comunicado a esta Comisión ningún supuesto en el que AUNA haya incumplido su obligación de suspender el uso del número en estos casos.

c) En relación con otro tipo de obligaciones

Por último, cabe destacar que según la denuncia presentada, constituye un incumplimiento de la obligación de control de numeración la remisión a la Secretaría de los datos materiales de los intermediarios en la cadena de comercialización cuando lo que ésta solicita son los datos del beneficiario de la numeración, es decir, del prestador de los servicios de tarificación adicional.

En relación con esta cuestión hay que precisar que los hechos ponen de manifiesto que la utilización de los intermediarios en este caso concreto parece haber impedido dotar de mayor agilidad al procedimiento previsto por el artículo 2.2.9 del Código de Conducta y el apartado séptimo de la Orden de Tarificación Adicional (Orden PRE/361/2002) en caso de incumplimiento por el prestador de los servicios de información de las obligaciones que le incumben, que exigiría la posibilidad de una identificación inmediata del prestador de servicios de tarificación adicional.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Esta falta de identificación inmediata del prestador de servicios de tarificación adicional por parte del operador de red constituiría un incumplimiento de la obligación de suministro de información contemplada en el artículo 9.1 letras f) y g) de la Ley General de Telecomunicaciones, pues para instruir el procedimiento recogido en el artículo 7 de la Orden de Tarificación Adicional, la CSSTA ha de requerir al operador del servicio de red de tarificación adicional la identificación del prestador del servicio de tarificación y el operador de red, a su vez, ha de suministrar correctamente este dato.

El incumplimiento de esta obligación de suministro de información constituiría una infracción sancionable por Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, conforme a los artículos 55. d) y 58 b) de la Ley General de Telecomunicaciones, así como 53. p), en caso de reiteración.

Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, esta Comisión,

RESUELVE

Unico.- Declarar concluso el Periodo de Información Previa de referencia, y resolver no iniciar un procedimiento sancionador al respecto, al no haber indicios de incumplimiento de la normativa vigente en el momento en que se producen los hechos denunciados.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

Vº Bº

EI PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Reinaldo Rodríguez Illera

Alfonso Ramos de Molins Sainz de Baranda